



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
LIMITADA

E/CN.4/2002/L.41
12 de abril de 2002

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

58º período de sesiones

Tema 10 del programa

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Argelia, Bangladesh*, Belarús*, Bhután*, Botswana*, Burundi, Camerún, China, Congo*, Côte d'Ivoire*, Cuba, Ecuador, Egipto*, El Salvador*, Eritrea*, Etiopía*, Filipinas*, Ghana*, Guinea Ecuatorial*, Haití*, India, Indonesia, Irán (República Islámica del)*, Iraq*, Jamahiriya Árabe Libia, Kenya, Madagascar, Malasia, Mauritania*, México, Mongolia*, Mozambique*, Nepal*, Níger, Pakistán, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, República Dominicana*, República Democrática Popular Lao*, República Popular Democrática de Corea*, República Unida de Tanzania*, Rwanda*, Sierra Leona, Sri Lanka*, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Tailandia, Togo*, Túnez*, Turquía*, Venezuela, Viet Nam, Yemen*, Zambia, Zimbabwe*: proyecto de resolución

2002/... El derecho a la alimentación

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,

* De conformidad con el párrafo 3 del artículo 69 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social.

Recordando también las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las que se reconoce el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre,

Recordando además la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición,

Teniendo presente la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma del 13 al 17 de noviembre de 1996,

Recordando todas sus resoluciones anteriores a este respecto, en particular la resolución 2001/25, de 20 de abril de 2001, así como la resolución 56/155 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2001,

Reafirmando que todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí,

Reconociendo que los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tienen carácter mundial, y que es probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente en algunas regiones si no se lleva a cabo con urgencia una acción decidida y concertada, dado el incremento previsto de la población mundial y la presión a que se ven sometidos los recursos naturales,

Reafirmando que un entorno político, social y económico pacífico, estable y propicio, tanto en el plano nacional como en el internacional, constituye el fundamento básico que permitirá a los Estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza,

Reiterando, como se hizo en la Declaración de Roma, que los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política o económica, y reafirmando a este respecto la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de aplicar medidas unilaterales que no estén en consonancia con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas y que pongan en peligro la seguridad alimentaria,

Convencida de que cada Estado debe adoptar una estrategia acorde con sus recursos y capacidades para lograr sus objetivos individuales al aplicar las recomendaciones contenidas en la Declaración de Roma y el Plan de Acción de Roma de la Cumbre Mundial y, al mismo tiempo, cooperar a nivel regional e internacional en la estructuración de soluciones colectivas a los problemas mundiales de seguridad alimentaria en un mundo en que las instituciones, las sociedades y las economías están cada vez más relacionadas entre sí, por lo que es esencial que se coordinen los esfuerzos y se compartan las responsabilidades,

Destacando la importancia de corregir la constante tendencia a la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo dedicada a la agricultura, en términos reales y como parte del total de la asistencia oficial para el desarrollo,

1. *Reafirma* que el hambre constituye un ultraje y una violación de la dignidad humana y, por consiguiente, su eliminación requiere que se adopten medidas urgentes a nivel nacional, regional e internacional;

2. *Reafirma también* el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, a fin de que pueda desarrollar y mantener plenamente su capacidad física y mental;

3. *Considera* intolerable que 815 millones de personas en todo el mundo estén subalimentadas y que cada año mueran 36 millones de personas, directa o indirectamente, como consecuencia del hambre y de carencias nutricionales, la mayoría de ellas mujeres y niños, en particular de países en desarrollo, en un mundo que ya produce alimentos suficientes para alimentar a toda la población del planeta;

4. *Subraya* la necesidad de desplegar esfuerzos para movilizar y aprovechar al máximo la asignación y la utilización de los recursos técnicos y financieros de todas las fuentes, incluido el alivio de la deuda externa de los países en desarrollo, a fin de reforzar las actividades nacionales para aplicar políticas en pro de una seguridad alimentaria sostenible;

5. *Invita* a todas las instituciones financieras y de desarrollo, así como a los organismos y fondos pertinentes de las Naciones Unidas, a que atribuyan prioridad a la erradicación del hambre y la inseguridad alimentaria, así como a la realización del derecho a la alimentación, y proporcione los fondos necesarios para ello;

6. *Alienta* a todos los Estados a que adopten medidas para lograr gradualmente la realización del derecho a la alimentación, incluso medidas encaminadas a promover condiciones que permitan que nadie padezca hambre y todos disfruten plenamente cuanto antes del derecho a la alimentación, y a que formulen y aprueben planes nacionales de lucha contra el hambre;

7. *Recuerda* el informe *Estado Mundial de la Infancia 2001* del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sobre la primera infancia y, en este contexto, que la alimentación de los niños pequeños merece la máxima prioridad;

8. *Toma nota con reconocimiento* del informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (E/CN.4/2002/58), y encomia al Relator Especial por su valiosa labor de promoción del derecho a la alimentación;

9. *Reitera* la petición hecha al Relator Especial de que contribuya eficazmente al examen de mitad de período de la aplicación de la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y al Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que se ha de celebrar en Roma del 10 al 13 de junio de 2002, presentando a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sus recomendaciones sobre todos los aspectos del derecho a la alimentación, y de que asista a esa conferencia para que contribuya plenamente a los debates basándose en su mandato;

10. *Acoge con beneplácito* las tres consultas de expertos sobre el derecho a la alimentación, convocadas por la Alta Comisionada y su compromiso personal con la promoción y la realización del derecho a la alimentación y, en este contexto, pide a la Alta Comisionada que presente a la próxima Cumbre Mundial sobre la Alimentación un informe amplio basado en la labor ya realizada por el Relator Especial de la Comisión y en los resultados de las tres consultas de expertos convocadas por su Oficina en relación con este asunto;

11. *Alienta* al Relator Especial a que incorpore una perspectiva de género en las actividades relacionadas con el cumplimiento de su mandato;

12. *Pide* a la Alta Comisionada que proporcione al Relator Especial todos los recursos humanos y financieros necesarios para el desempeño eficaz de su mandato;

13. *Acoge con beneplácito* la labor ya realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la promoción del derecho a una alimentación adecuada, en particular su Observación general N° 12 (1999) sobre el derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), en la cual el Comité afirma, entre otras cosas, que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos;

14. *Pide* al Relator Especial que presente a la Asamblea General en su quincuagésimo séptimo período de sesiones un informe, y que informe a la Comisión en su 59° período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución;

15. *Invita* a los gobiernos, a los organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, a los órganos creados en virtud de tratados y a las organizaciones no gubernamentales a que cooperen plenamente con el Relator Especial en el cumplimiento de su mandato, entre otras cosas, mediante la presentación de observaciones y sugerencias sobre los medios apropiados para la realización del derecho a la alimentación.
